EXPEDIENTE No.: CEDH/IV/321/2011
QUEJOSAS: N1 Y N2
AGRAVIADOS: M1 y M2
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN
No. 39/2012
AUTORIDAD
DESTINATARIA: PROCURADURÍA
GENERAL DE
JUSTICIA DEL
ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sin., a 15 de octubre de 2012

**LICENCIADO MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ,
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA**

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º.; 2º.; 3º.; 4º Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1º.; 7º, fracción III; 16, fracción IX; 57 y 59 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, así como 1º.; 4º.; 77; 94; 95 y 96 de su Reglamento Interno, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número CEDH/IV/321/2011, relacionados con el caso de las señoras N1 y N2, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

El 13 de septiembre de 2011, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió escrito de queja de las señoras N1 y N2, a través del cual hicieron valer presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de sus hijos M1 y M2, respectivamente.

En dicho escrito refirieron que el día 9 de septiembre de 2011, aproximadamente a las 09:00 y 09:30 horas, los menores M1, de ** años de edad y M2, de ** años de edad, sucesivamente, fueron detenidos por elementos del Grupo Especial de la Policía Ministerial del Estado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, cuando circulaban a bordo de una motocicleta que contaba con reporte de robo.

Que al momento de la detención sus hijos no opusieron resistencia, subiéndolos a una de las patrullas y siguieron con sus rondines, aproximadamente dos horas después los llevaron a las oficinas de la Policía Ministerial del Estado en Los Mochis.

Asimismo, señalaron que en la Policía Ministerial del Estado vieron a sus hijos, percatándose que habían sido golpeados ya que les informaron que les habían pegado en sus glúteos con unas tablas, seis golpes por cada letra del abecedario y que al momento de estarles pegando les preguntaban que si quién les había pegado y si respondían que los agentes, entonces los mismos comenzaban a pegarles en la cabeza con las manos y les decían que dijeran que se habían golpeado con la moto.

De igual forma, que sus hijos les enseñaron sus glúteos observando que las tenían negras, moreteadas, que se les dificultaba para caminar, además refirieron que les quitaron los zapatos y que los agentes los pisaban con sus botas y brincaban sobre sus pies.

Por último, señalaron que sus hijos se encuentran internos en el CIPA (Centro de Internamiento para Adolescentes) en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

- 1.** Escrito de queja de fecha 13 de septiembre de 2011, por medio del cual las señoras N1 y N2 hacen del conocimiento de esta CEDH presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de sus menores hijos M1 y M2.
- 2.** Oficio número CEDH/VG/CUL/001940 de fecha 19 de septiembre de 2011, dirigido por esta Comisión Estatal al Director de Policía Ministerial del Estado, por el cual se le solicita rinda un informe detallado sobre los actos que refiere la queja; asimismo, remita copia certificada del o los partes informativos que se hubiesen elaborado con motivo de la detención, del oficio con el cual fueron puestos a disposición de la autoridad respectiva, así como de los dictámenes médicos de lesiones que en su caso se hayan elaborado.
- 3.** Acta circunstanciada de fecha 21 de septiembre de 2011, en la que se hace constar que personal de este organismo se constituyó en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán a efecto de entrevistar a los adolescentes agraviados en la presente queja y con ello conocer su testimonio de los hechos denunciados por sus madres.

4. En fecha 27 del mismo mes y año, se hizo constar que se recibió llamada telefónica de la señora N1 con la finalidad de conocer el estado que guarda su expediente.

5. Oficio número 07583 de fecha 27 de septiembre de 2011, por el cual el Jefe del Departamento Legal de Policía Ministerial del Estado dio respuesta al informe solicitado, anexando copias de las constancias que sustentan el mismo.

6. Mediante oficio número CEDH/VG/CUL/002132 de fecha 5 de octubre de 2011, este organismo solicitó la colaboración de la Directora del Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán a efecto de que informara la fecha y hora en que los agraviados ingresaron a ese Centro, resultado del examen médico de ingreso que se les practicó, con qué lesiones o heridas ingresaron dichos menores y en su caso cuál fue la atención médica que se les brindó con motivo de tales lesiones o heridas.

7. Asimismo, el día 6 de octubre siguiente, con oficio número CEDH/VG/CUL/002137, esta Comisión Estatal solicitó la colaboración del Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Mochis, a fin de que informara si los menores M1 y M2 fueron llevados a las instalaciones de esa Dirección de su cargo, motivo y fundamento legal por el cual fueron recluidos, en caso de haberseles practicado examen médico precisara cuál fue el resultado del mismo y señalar si se les brindó atención con motivo de tales lesiones.

8. El día 7 de octubre de 2011, este organismo recibió el oficio número 381/2011 de fecha 6 del mismo mes y año, firmado por la Directora del Centro de Internamiento para Adolescentes, dando respuesta a nuestro diverso CEDH/VG/CUL/002132 de fecha 5 de octubre de 2011.

9. Por otra parte, el Encargado de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, mediante oficio número 3585/2011 de 10 de octubre 2011, informó que se encontraba imposibilitado para dar contestación al oficio enviado por esta Comisión, ya que después de haber llevado a cabo una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esa Dirección General no se encontró registro alguno de que los menores M1 y M2 hayan estado detenidos en dichas instalaciones.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El día 9 de septiembre de 2011, aproximadamente a las 11:00 horas, los menores M1 y M2, de ** y ** años de edad, respectivamente, fueron detenidos en flagrancia por elementos del Grupo Especial de la Policía Ministerial del

Estado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, por delitos contra la salud y por circular a bordo de una motocicleta que contaba con reporte de robo.

Motivo por el cual fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Centro de Operación Estratégica (COE) en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, para posteriormente ser trasladados al Centro de Internamiento para Adolescentes (CIPA) en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Que al momento de que personal de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos se entrevistó con dichos menores en el citado Centro, ratificaron los hechos expuestos por sus madres en el escrito de queja en el sentido de que habían sido golpeados en sus glúteos por elementos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado.

IV. OBSERVACIONES

Cabe precisar que a esta autoridad en derechos humanos no le corresponde investigar delitos, pero sí violaciones a derechos humanos; es decir, no tiene por misión establecer conductas delictivas e imponer las penas correspondientes, sino analizar el desempeño de los servidores públicos en relación con el respeto a derechos humanos, procurando que las instituciones responsables de las violaciones a derechos humanos reparen los daños causados.

En concordancia a lo expresado en el párrafo precedente, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos no se opone a la prevención, investigación y persecución de los delitos por parte de las autoridades competentes, por el contrario, hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas, investigar con los medios a su alcance los ilícitos que se cometan en el ámbito de su competencia a fin de identificar a los responsables y lograr que se impongan las sanciones pertinentes, así como de asegurar que ningún delito se combata con otro ilícito.

Asimismo, es deber de este organismo estatal denunciar ante la sociedad las violaciones que observe por parte de las autoridades responsables y poner a disposición de la autoridad competente los resultados de su investigación, a efecto de que las conclusiones públicas a que arribe sean tomadas en cuenta por ésta.

En este contexto se expresa la obligación que tienen los servidores públicos de cumplir y hacer cumplir la ley a través de sus instituciones públicas, en el marco del sistema de protección de derechos humanos reconocidos en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, previniendo la comisión de conductas que vulneren tales derechos con los medios a su alcance.

Precisado lo anterior, del análisis lógico jurídico de las evidencias que integran el expediente de queja número CEDH/IV/321/2011, se advierte en el caso violaciones a derechos humanos a la integridad y seguridad personal y seguridad jurídica, así como a la violación a los derechos de los niños, por actos consistentes en trato cruel, inhumano o degradante y prestación indebida del servicio público, en perjuicio de los menores M2 y M1, de ** y ** años de edad, respectivamente, atribuibles a elementos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado que el día 9 de septiembre de 2011 llevaron a cabo su detención.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la integridad y seguridad personal

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Trato cruel, inhumano o degradante

El derecho a la integridad y seguridad personal se define como la prerrogativa que tiene toda persona a no sufrir actuaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisonómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.

Implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de no sufrir alteraciones nocivas en la estructura psíquica y física del individuo, cuya contrapartida consiste en la obligación de las autoridades de abstenerse de la realización de conductas que produzcan dichas alteraciones.

De hecho la violación de este derecho no se presenta de manera aislada, sino que puede afectar con una misma acción diversos derechos, como lo es la libertad, la no discriminación, tortura, desaparición forzada de personas y trato degradante e inhumano.

Dicho derecho humano protege la integridad física y psíquica del individuo, estando obligado a respetarlo cualquier servidor público que vulnere la seguridad jurídica del titular del derecho en cuanto al estricto cumplimiento del orden jurídico por parte del Estado.¹

---

¹ Soberanes Fernández, José Luis, "Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos", Editorial Porrúa. Pág. 225 y 226.

Expresado lo anterior, procederemos a analizar cuál es el motivo de la cuestión, es decir, la litis, el hecho por el cual las señoras N2 y N1, así como sus hijos M2 y M1, sucesivamente, se inconformaron en contra de elementos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado que llevaron a cabo la detención de éstos últimos.

A ese respecto, se cuenta con la queja interpuesta por las señoras N2 y N1, quienes son coincidentes en señalar que sus hijos M2 y M1, sucesivamente, fueron golpeados por elementos de la Policía Ministerial del Estado que llevaron a cabo su detención el día 9 de septiembre de 2011, en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Señalamiento el anterior que se encuentra robustecido con el escrito de queja presentado por sus hijos menores de edad M2 y M1.

Del contenido de sus escritos ambos refieren que fueron golpeados por los elementos de la Policía Ministerial del Estado que llevaron a cabo su detención al propinarles golpes con una tabla en sus glúteos y por cada pregunta que les hacían les daban seis tablazos, así como por cada letra del abecedario.

Incluso, el primero de ellos escuchó el ruido que hace un encendedor al prenderse para inmediatamente después sentir algo caliente en su brazo izquierdo encima del codo, por lo que ante el ardor retiró su brazo pero un policía ministerial de nuevo le puso algo caliente.

Como en toda investigación, el dicho de las partes juega un papel importante pero no trascendental en razón de que tiene que ser robustecido con otros medios probatorios, circunstancias que en la especie sí se actualizan en el expediente de mérito.

Ello es así toda vez de que en autos del presente expediente el dicho de los quejosos se encuentra administrado con diversos medios probatorios que dan fuerza y contundencia jurídica al hecho que se investiga.

En primer orden se cuenta con la diligencia de fecha 21 de septiembre de 2011, levantada por personal de esta Comisión Estatal, en la que se tomaron nueve placas fotográficas a los directamente agraviados, en este caso a los menores M2 y M1, en el que claramente se advierten las lesiones que presentan las zonas de su superficie corporal, en la que señalan fueron dañadas a consecuencia de los malos tratos y golpes que les infirieron los elementos.

Probanza que se robustece con el informe de fecha 7 de octubre de 2011, rendido con oficio número 381/2011, suscrito por la Directora del Centro de Internamiento para Adolescentes, al que anexó ficha inicial de registro del área médica, en la que se hace constar las lesiones que presentaron en su momento los menores M2 y M1.

En lo que respecta al menor M2, al momento de ser valorado médicamente presentó lesiones físicas recientes, tales como equimosis violácea en ambos glúteos con escoriación interglútea y escoriación en proceso de cicatrización en espalda zona lumbar izquierda.

De hecho, de la valoración médica realizada por el Departamento de Medicina Forense de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se desprende que el día 9 de septiembre de 2011 se certificó: “Quemadura de primer grado de 1.5 cm. de diámetro localizado en tercio inferior cara externa del brazo izquierdo, producido por mecanismo de fuego directo”.

Lesión ésta que coincide con lo aseverado por el menor en relación a las agresiones físicas sufridas por los policías aprehensores y que fueron también corroboradas y documentadas fotográficamente por personal de esta CEDH.

Por su parte, M1 se asentó por el médico adscrito a dicho Centro que al valorarlo el día 12 de septiembre de 2011 presentaba lesiones recientes, como equimosis en ambos glúteos con escoriación interglútea, escoriación cicatrizada en abdomen flanco izquierdo, equimosis en el muslo izquierdo en su tercio medio cara anterior.

Lesiones que guardan correspondencia con el dicho de los menores al señalar que fueron golpeados con una tabla en sus glúteos, aunado a que al momento de ser examinados por el médico adscrito al Centro de Internamiento para Adolescentes dictaminó que presentaban lesiones recientes.

Por lo que si tomamos en cuenta la fecha de la detención y que fue el 9 de septiembre de 2011 con la revisión médica que se les realizó y que sucedió el 12 siguiente, aún presentaban indicios vigentes de sus lesiones, mismas que se insiste mantienen relación con las partes de sus cuerpos que refieren los quejosos fueron lesionadas.

A lo anterior se le abona que cuando personal de este Organismo Estatal entrevistó a los menores en comento el 21 de septiembre de 2011, todavía presentaban indicios claros de las lesiones que les fueron inferidas debido a

que éstas mantienen congruencia con las descritas por el médico del referido Centro al valorarlos el 12 del citado mes y año.

Así las cosas, de las evidencias allegadas al sumario crea la firme convicción a esta autoridad en derechos humanos que los menores M2 y M1, en su momento presentaron lesiones ya descritas en su superficie corporal, mismas que refieren les fueron inferidas por los elementos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado que el día 9 de septiembre de 2011 llevaron a cabo su detención.

Luego entonces, falta determinar si esas lesiones que presentaron los menores en mención fueron inferidas por dichos elementos.

Al respecto, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de acuerdo a las pruebas aportadas, sobre todo el dicho de los menores, las partes que refieren les fueron lesionadas y el dictamen médico que se elaboró por el médico adscrito al Centro de Internamiento para Adolescentes, no tiene duda de que quienes llevaron a cabo dichos tratos crueles en la humanidad de M2 y M1 fueron los elementos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado que llevaron a cabo su detención.

Ello es así, en virtud de que de entrada fueron los únicos que en un primer momento tuvieron contacto con dichos menores, aunado a que éstos los señalan directamente; incluso refieren los lugares a donde fueron trasladados una vez que fueron detenidos, entre las que se encuentran las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado en Los Mochis, para posteriormente ser trasladados al Centro de Internamiento para Adolescentes en esta ciudad.

De lo antes expresado se advierte que la única autoridad que tuvo contacto con dichos menores fueron los elementos de la Policía Ministerial del Estado que llevaron a cabo su detención y si a ello se le agrega que los agraviados los acusan directamente y que las lesiones que dicen sufrir en su momento se acreditaron, constituye evidencia indubitable que sí existieron, luego entonces, no existe mayor controversia para aseverar categóricamente que de acuerdo al caudal probatorio las lesiones que presentaron los menores M2 y M1 fueron inferidas por los elementos de la Policía Ministerial que llevaron a cabo su detención.

No pasa desapercibido el hecho de que al momento de solicitar el informe al Director de la Policía Ministerial del Estado, no hace referencia a alguna circunstancia que haya llevado a elementos a su cargo al empleo del uso de la fuerza para el sometimiento de estos menores, incluso afirma que no fue necesario el empleo de la misma.

Asimismo argumentó que del contenido del informe que le fue rendido por los elementos que llevaron a cabo la detención de los agraviados, éstos hayan resultado lesionados.

A ese respecto, cabe señalar que el parte informativo rendido por la Policía Ministerial del Estado, no es un documento público al que se le deba otorgar valor probatorio pleno, lo que sí alcanza es un valor testimonial, mismos que para efecto de que alcancen convicción probatoria deben complementarse con otras diligencias.

En sí, dicho informe sólo es el medio por virtud del cual los elementos policiacos hacen del conocimiento del Ministerio Público el resultado de sus investigaciones practicadas con relación a los hechos, cuyo valor equivale al otorgado a una prueba testimonial, que para su eficacia, necesariamente deberá corroborarse con otros medios de convicción, situación que no acontece en el caso que nos ocupa.

No es óbice llegar a la anterior conclusión el hecho de que la autoridad, en este caso el Director de Policía Ministerial del Estado, agregue a su informe copia de los dictámenes médicos de lesiones que se les practicó a los menores M2 y M1 el día de su detención, elaborado por la médico legista de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, de cuyo contenido se advierte a manera de conclusión que no presentan huellas de lesiones en ninguna parte de su superficie corporal.

Circunstancia la anterior que se razonará por separado, pero que por sí sola no es suficiente para el fin pretendido, al ir en contra del resto de los medios probatorios existentes.

A ese respecto me permito citar la siguiente tesis:

“Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Octubre de 2001

Tesis: VI.1o.P.141 P

Página: 1155

PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA JUDICIAL. NOES UN DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE SE LE DEBA OTORGAR VALOR PROBATORIO PLENO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

El artículo 195 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, en su último párrafo, dice: “Las investigaciones y demás diligencias que practiquen los agentes de la Policía Judicial, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público...”; por lo que debe entenderse, en primer lugar, que el parte informativo de dicha autoridad no es una prueba documental pública y, como consecuencia, no puede valorarse como tal, sino que dicho informe sólo es el medio por virtud del cual los elementos policiacos hacen del conocimiento del Ministerio Público el resultado de sus investigaciones practicadas en relación con el delito y/o el delincuente, cuyo valor equivale al otorgado a la prueba testimonial que, para su eficacia, necesariamente deberá corroborarse con otros medios de convicción que se encuentren agregados al sumario.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 226/2001. 14 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Juan Carlos Ramírez Benítez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 76, Sexta Parte, página 59, tesis de rubro: “POLICÍA JUDICIAL, VALOR PROBATORIO DE LOS INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS AGENTES DE LA.”

Así las cosas, la autoridad expresamente viene negando los hechos, empero no aporta ni una sola probanza que corrobore su dicho; en tal virtud, esa simple negación por sí sola resultaría insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que existen en el sumario del expediente que hoy se resuelve, en ese sentido, admitir como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su informe sobre las demás pruebas, a ese respecto se cita por tener relación, la siguiente Tesis:

“Novena Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: VI.1o.P.J/15

Página: 1162

DECLARACIÓN DEL INculpADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL

ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: “El que niega está obligado a probar cuando su negación es contraria a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un hecho.”; la sola negativa del inculpado de haber participado en el delito o delitos que se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que existen en su contra en el proceso penal; máxime que durante la secuela procesal no aportó prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir como válida ésta, sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 251/2001. 15 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Remes Ojeda. Secretario: Gerardo Domínguez Romo.

Amparo directo 258/2001. 5 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez.

Amparo directo 279/2001. 5 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel.

Amparo en revisión 225/2001. 12 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez.

Amparo en revisión 237/2001. 12 de julio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel.”

En esa tesitura, diversas legislaciones internacionales se pronuncian en contra de cualquier acto que ponga en riesgo la integridad personal de los ciudadanos, al establecer que nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, a que se respete su integridad física, psíquica y moral y a ser tratada con respeto a su dignidad inherente al ser humano, tal y como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 3º y 5º; Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus numerales 5.3 y 5.4; el numerario 7º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 2º y 7º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Con independencia de lo establecido en los citados instrumentos internacionales, la Constitución Política Estatal, recientemente reformada en su artículo 4º Bis y siguientes (Reforma publicada el pasado 26 de mayo del presente año en “*El Estado de Sinaloa*” Órgano Oficial el Gobierno del Estado); señala que en el Estado de Sinaloa toda persona es titular de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la propia Constitución local, así como en lo previsto en los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano.

Por su parte, el Instructivo para la Realización de las Funciones Específicas de la Policía Ministerial del Estado, establece que en ninguna circunstancia el agente infringirá tortura, violencias o trato cruel al sujeto aprehendido.

A su vez, el Manual de Organización, Funcionamiento y Procedimientos para la Policía Judicial (Ministerial) del Estado, señala que la función de los integrantes de la Policía Ministerial se hará conforme a los principios de legalidad y respeto a los derechos ciudadanos.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho de los menores

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Interés superior del menor

A juicio de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, una vez analizadas las probanzas que existen en el expediente CEDH/IV/321/2011 está en aptitud de aseverar que se han cometido violaciones a derechos humanos de los niños en atención al interés superior del menor.

En razón de que los golpes y malos tratos que llevaron a cabo los elementos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado sobre la humanidad de M2 y M1, se hizo sin tomar en cuenta que eran menores de edad y que por esa circunstancia los servidores públicos están obligados a proporcionar un trato diferenciado, precisamente para garantizar el óptimo y sana integridad del menor.

En ese sentido, los servidores públicos involucrados fueron omisos en ponderar que estaban ante la presencia de dos menores de ** y ** años de edad, respectivamente, al sujetarlos a actos crueles y denigrantes debido a que los golpearon en sus glúteos con una tabla, sin que de autos se desprendiera la necesidad del empleo del uso de la fuerza, de ahí que, contravinieron el interés superior del menor señalado en una ley especial como lo es la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.

Dicha Ley tiene por finalidad esencial garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de dicha Ley.

A su vez, el artículo 5° del citado ordenamiento local señala que el objetivo de las niñas, niños y adolescentes es asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y

moralmente en condiciones de igualdad, en cada una de las etapas de su crecimiento.

En ese tenor le corresponde a las autoridades estatales y municipales asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos, así como la toma de medidas necesarias para su bienestar, al apartarse de ello, se traduce en actos que vulneran derechos humanos en perjuicio de dichos menores.

Ello en razón de que en este caso los elementos de la Policía Ministerial que llevaron a cabo sus detenciones no se preocuparon por tener el debido cuidado adoptando las medidas necesarias tendientes a garantizarles su bienestar, que no es otra cosa más que se le brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria, pues ello es un derecho de prioridad de los niños, niñas y adolescentes que consagra el artículo 16, inciso A) del referido cuerpo de leyes.

¿A qué nos referimos cuando aseveramos que los elementos de Policía Ministerial del Estado no adoptaron las medidas necesarias para garantizar a los menores en mención su plena integridad física y a su bienestar?, simplemente bastaba que se les proporcionara un trato digno y respetuoso, debido a que de acuerdo a la mecánica de los hechos no había necesidad de emplear el uso de la fuerza muchos menos aplicar un castigo, pues se infiere que la detención se llevó a cabo sin el mayor uso de la fuerza.

Aunado a que de acuerdo a los vertidos por las quejas y por los propios menores, los golpes y malos tratos no se realizaron al momento de la detención, sino cuando se encontraban en el lugar en que fueron recluidos al parecer las instalaciones de la Policía Ministerial en Los Mochis, Ahome.

Lo anterior constituía un imperativo para los elementos de la referida corporación policiaca ya que de entrada estarían garantizando ese bien supremo de todo menor que es su bienestar, ello con independencia de las diligencias que desarrollarían para ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público.

En abono a lo expresado con antelación, cabe precisar que la niñez ha transitado de ser considerada como objeto de derecho a ser sujeto de derechos, es decir, se le ha reconocido la capacidad de exigir el respeto y garantía de sus derechos, constituyen un compromiso irrevocable para las autoridades, toda vez de que éstas deben implementar programas de apoyo y rescate de la niñez, en especial de aquella desprotegida, abusada, maltratada y olvidada.

Ello, se refleja a través de ordenamientos jurídicos tal es el caso de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° párrafo sexto que señala que *“los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”*, lógicamente que para lograr tal fin las autoridades juegan un papel especial ni se diga las corporaciones policiacas en las que bajo la supervisión del Ministerio Público se ha depositado la investigación de los delitos y que para alcanzar su propósito debe actuar con profesionalismo, honradez, legalidad, eficiencia y pleno acatamiento de los derechos humanos.

Por su parte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 7° establece que corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos.

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3° retoma el interés superior del niño, esto es, que para la toma de cualquier decisión o medida de parte de las autoridades, se debe de tomar en cuenta de manera previa y preferente, el bienestar de los menores y favorecer a su mejor desarrollo. La salvaguarda de los derechos del menor y el cuidado de su integridad debe prevalecer sobre cualquier otro interés y sobre todo de cualquier formalidad.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC17/2002, ha sustentado que en los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelvan derechos de los niños, se deben observar los 11 principios del debido proceso legal; y, en ese sentido, debe tomarse en consideración que las condiciones en que participan los menores en un proceso, no son iguales a las de un adulto, debido a su falta de madurez física y mental que los coloca en una clara situación de vulnerabilidad, por lo que es necesaria la adopción de medidas especiales que tienen por objeto la atención de esas diferencias naturales.

En similares pronunciamientos tenemos otros ordenamientos internacionales que forman parte de nuestro orden jurídico mexicano, tal es el caso de los artículos 2 y 8 de la Declaración de los Derechos del Niño; 24.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 10.3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 5.1; 7.1 y 19 de la Convención

Americana sobre los Derechos Humanos; I; VII y XXX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la seguridad personal

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Prestación indebida del servicio público

La prestación indebida del servicio se entiende como cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o deficiencia de un servicio público de parte de un servidor público que implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

En ese contexto, a juicio de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los supuestos mencionados en el párrafo precedente se encuentran plenamente satisfechos en el caso en estudio.

Afirmación que se formula del señalamiento vertido por las señoras N1 y N2, quienes refieren haber visto las lesiones que presentaban sus hijos.

Señalamiento que se robustece con la propia versión efectuada por los menores M2 y M1, al señalar que al momento de ser detenidos por elementos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado fueron objeto de malos tratos y tratos crueles e inhumanos al ser golpeados con una tabla en su glúteos.

Versión que se concatena y adquiere mayor valor probatorio con el dictamen médico de lesiones elaborado por el médico adscrito al Centro de Internamiento para Adolescentes en esta ciudad, quien de manera detallada describió las lesiones que éstos presentaban, las cuales coinciden con las señaladas por ellos en su escrito de queja.

Sin que se escape las fotografías que personal de esta Comisión Estatal tomó al momento de visitarlos en dicho Centro, lo que demuestra de manera fehaciente que dichos menores fueron sujetos a malos tratos y a penas crueles e inhumanas al ser golpeados de la forma en que hemos venido refiriendo.

Todo ello, sin que la autoridad acreditara con medio probatorio eficaz la no intervención en estos hechos, al contrario se ubican en circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión en que sucedieron los hechos y al no aportar diversa probanza no queda más que reiterar y aseverar las violaciones a derechos humanos a que fueron objeto de parte de los elementos de Policía Ministerial del Estado que llevaron a cabo su detención.

Por otra parte, a juicio de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del caudal probatorio allegado al expediente en estudio, es suficiente para aseverar que la doctora N3, médico legista de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ha incurrido en violaciones a derechos humanos a la legalidad, en la especie a una indebida prestación del servicio.

Afirmación que se formula al considerar que fue omisa al no asentar en el dictamen médico de fecha 9 de septiembre de 2011, las lesiones que presentaban en su superficie corporal los menores M2 y M1, cuando de las evidencias aportadas eran por demás evidentes las lesiones que éstos presentaban, particularmente las lesiones en los glúteos de ambos menores.

Pero contrario a lo que debe señalarse en este tipo de situaciones, a manera de conclusión señaló en sus respectivos dictámenes médicos que los menores en comento no presentaban huellas de lesiones en ninguna parte de su cuerpo, excepción hecha de la lesión por quemadura en el brazo de M2.

Resultado pericial que se contrapone con las versiones formuladas por las señoras N1 y N2, quienes refieren haber visto las lesiones que presentaban sus hijos.

Además se cuenta con el dictamen médico elaborado por el doctor del Centro de Internamiento para Adolescentes, mismo que claramente dictaminó las lesiones que presentaban dichos menores, aunado a lo anterior existen diversas fotografías que personal de esta Comisión Estatal tomó de las lesiones que presentaban los aquí agraviados.

Probanzas que concatenadas entre sí, hacen inverosímil el resultado al que llegó la citada médico legista al aseverar que los menores M2 y M1 no presentaban lesiones en su integridad física.

A ese respecto, es importante mencionar que la prestación indebida del servicio público siempre le será atribuida a un servidor público, en ese sentido, del contenido de los artículos 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se denomina servidor público a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía,

quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

En similares términos se pronuncia la Constitución Política del Estado de Sinaloa en su artículo 130, al señalar que servidor público es toda aquella persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los Ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

Luego, entonces, al acreditarse el anómalo proceder de la autoridad, ya sea por una deficiencia o un exceso de las facultades legales que le son conferidas automáticamente, se actualiza la indebida prestación del servicio por parte de dichas autoridades, incumpliendo con ello con los principios de legalidad, honradez, lealtad, eficiencia y profesionalismo que como servidores públicos están obligados a cumplir.

A ese respecto, el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los servidores públicos al ejercer indebidamente sus atribuciones pueden incurrir en responsabilidad política, penal o administrativa.

Dicho numeral también establece los procedimientos a seguir sobre tales responsabilidades y dice que pueden desarrollarse en forma independiente, con la salvedad de que no podrán imponerse sanciones de la misma naturaleza cuando la conducta anómala actualice consecuencias de esa índole en diferentes cuerpos normativos.

Es decir, el solicitar a las autoridades involucradas el inicio de un procedimiento administrativo en contra de servidores públicos a quienes se les considera han incumplido en actos u omisiones, es independiente y autónomo del político, del penal y del civil a que pudiera dar lugar una sola conducta ilícita cometida por un servidor público debido a que la naturaleza de la responsabilidad administrativa tiene como objetivo preservar el correcto y eficiente servicio público, que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Por otra parte, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones en que incurrir en el desempeño de sus atribuciones que contempla la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, pues el consentir tales actos es como dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad que garantizan el éxito del buen servicio público.

Ahora bien, para esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pasa desapercibido las diversas derogaciones realizadas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa mediante decreto número 156 del 24 de marzo de 2011, publicado en el Periódico Oficial en fecha 13 de abril del mismo año, así como a lo estipulado por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, la cual en relación a los hechos que se exponen en la presente resolución en materia de responsabilidad de servidores públicos señala:

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa:

“Artículo 2.- Es sujeto de esta Ley, toda persona física que desempeñe o haya desempeñado un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o paraestatal, municipal o paramunicipal, así como en las sociedades y asociaciones similares a estas, en Organismos que la Constitución Política del Estado de Sinaloa y Leyes otorguen autonomía y, en los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, con independencia de la jerarquía, denominación y origen del empleo, cargo o comisión, así como del acto jurídico que les dio origen.

Artículo 3.- Los servidores públicos en ejercicio de su función serán sujetos de responsabilidad administrativa cuando incumplan con sus deberes o incurran en las conductas prohibidas señaladas en esta Ley, así como en aquéllas que deriven de otras leyes y reglamentos.

Artículo 14.- Es responsabilidad de los sujetos de esta ley, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en la misma, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones.

Artículo 15.- Todo servidor público, tendrá los siguientes deberes:

- I. Cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público;”

.....

De ahí que con tal carácter los servidores públicos están obligados a observar en el desempeño de sus funciones los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como de cumplir con eficiencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de todo acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del empleo, cargo o comisión encomendado.

Por tales motivos, este organismo considera pertinente se inicie procedimiento administrativo en contra de los agentes N4 y N5, elementos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado adscritos al Grupo Especial de esa corporación, quienes son los que firmaron el parte informativo relacionado con la detención de los menores M2 y M1, el día 9 de septiembre de 2011, así como de la doctora N3, médico legista de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien fue la que dictaminó que dichos menores no presentaban lesiones.

Investigación que deberá realizarse por parte del Órgano de Control Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se aporten los elementos que den lugar al esclarecimiento de los hechos y en su oportunidad se imponga la sanción respectiva.

Con base en lo expuesto anteriormente y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como el artículo 4º Bis segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular a usted, señor Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, como autoridad jerárquica, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que se inicie procedimiento administrativo en contra de los CC. N4 y N5, elementos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado adscritos al Grupo Especial de esa corporación, así como de la doctora N3, médico legista de la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

SEGUNDA. Instruya a los elementos de la Dirección de Policía Ministerial del Estado para que en el debido desempeño de sus funciones, se conduzcan con absoluto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

TERCERA. Gire instrucciones a quien corresponda para que los médicos que se encuentran en los separos o lugares de detención, al momento de realizar los respectivos dictámenes médicos de lesiones lo realicen conforme a los principios de legalidad, profesionalismo, honradez, eficiencia y respeto a los derechos humanos que rigen a la institución del Ministerio Público.

CUARTA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se promuevan medidas preventivas, correctivas y de supervisión con las que se garantice evitar la repetición de conductas como las que originaron el presente pronunciamiento, enviando a este organismo público autónomo las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

VI. NOTIFICACIÓN Y APERCIBIMIENTO

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese al licenciado Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General de Justicia del Estado, de la presente Recomendación misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número 39/2012, debiendo remitírseles con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución lo mismo la General

de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

También se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el pasado 10 de junio de 2011.

El segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la misma, expresamente señala hoy día:

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Asimismo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma de fecha 10 de junio de 2011, que menciona en su artículo 1° que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente.

En ese sentido, tanto la no aceptación como la aceptación parcial, se considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado, ya que se traduce en la no aceptación del mencionado pronunciamiento.

Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el desprecio a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional.

En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos defensores de los derechos humanos del país, requieren, además de la buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en el párrafo tercero, del multicitado artículo 1° constitucional.

Es importante mencionar que de una interpretación armónica al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 100, párrafo tercero del Reglamento Interno de la misma, cuando una autoridad o servidor público acepta una recomendación, asume el compromiso de dar a ella su total cumplimiento.

Ahora bien y en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese a las señoras N1 y N2, en su calidad de quejosas, de la presente Recomendación, remitiéndoles con el oficio respectivo un ejemplar de esta

resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO